



¿QUÉ AUTORIDAD ES RESPONSABLE DE CONTENER LA CRIMINALIDAD Y SU VIOLENCIA?

Fernando Jiménez Sánchez

La criminalidad, la violencia y la constante violación del estado de derecho han dejado pérdidas humanas, sociales y económicas incalculables. La responsabilidad de garantizar la seguridad en México recae en autoridades federales, estatales y municipales, así como en el sector privado, la sociedad y los ciudadanos. Sin embargo, la distribución de competencias a menudo dificulta una asignación clara de responsabilidades gubernamentales.

La violencia, debido a su impacto en la vida de las personas y el interés que genera, se ha convertido en una prioridad para las instituciones federales en los últimos dos sexenios. Estados como Michoacán, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Morelos y Guanajuato, entre otros, han enfrentado situaciones de emergencia que ha implicado instrumentar medidas y operativos especiales. Las muy variadas situaciones de violencia en el país reflejan diferentes niveles de capacidad y fuerza criminal que en algunos casos pueden ser controlados por autoridades municipales o estatales, y que en los casos mencionados es necesaria la intervención federal.

La responsabilidad de proporcionar seguridad para el desarrollo libre de las personas es compartida a nivel gubernamental. De forma simplificada, los municipios son responsables del orden, la tranquilidad y el cumplimiento de las normativas locales; mientras que los estados deben apoyar a los municipios y controlar la criminalidad que afecta a más de un municipio o que representa un riesgo mayor para los ciudadanos. La federación se encarga de enfrentar la criminalidad seria, organizada y transnacional que amenaza a la sociedad nacional y que tiene repercusiones internacionales.

En la práctica, ningún nivel de gobierno mexicano puede individualmente enfrentar los desafíos criminales de forma aislada. Los municipios necesitan de los otros dos niveles de gobierno para mantener el orden y la paz comunitaria; los estados el apoyo para enfrentar la criminalidad que sobrepasa sus capacidades; y la federación debe coordinarse con otros países para contener la actividad criminal de alcance internacional.

La situación y características de la criminalidad nacional, transnacional o internacional sirve como un indicador que debe ponderarse para evaluar los resultados gubernamentales. Esto debido a que no es lo mismo garantizar la seguridad en áreas con desafíos menores que en-



frentar organizaciones que operan más allá de las fronteras nacionales. En este sentido, en México, ante la diversidad de retos, de lo local y simple, hasta la internacional y complejo, es complicado asignar y valorar las responsabilidades gubernamentales.

Jalisco y Sinaloa son ejemplos extremos de estos desafíos. En estos estados, se encuentran asentadas las dos organizaciones criminales transnacionales más relevantes e impactantes a nivel mundial. El Cártel Jalisco Nueva Generación como el Cártel de Sinaloa, no solo actúan de forma local y estatal, como suele ser la generalidad, sino que tienen presencia en alrededor de 20 de los 31 estados del país. Aparte de ello, tienen presencia en más de 100 países en los cinco continentes, con un importante actividad criminal en Estados Unidos.

Estos casos, por su tamaño, poder y complejidad hacen necesaria, aparte de la acción gubernamental y estatal, la intervención de la federación, en coordinación con otros países, para contener sus actividades criminales y la violencia que generan. Pese a que la responsabilidad de la seguridad recae en los tres niveles de gobierno, las características de estas organizaciones hacen que se vuelvan un asunto primordialmente federal, pues es es nivel de gobierno con la capacidad, civil y militar, para enfrentar a la violencia, investigar y reprimir los múltiples negocios criminales en los que estas organizaciones están involucradas, romper sus vínculos con autoridades, grupos sociales y el sector privado y coordinarse con otras naciones para perseguir el delito más allá de las fronteras nacionales.

Es común que las autoridades locales sean criticadas por las fallas en contener la violencia generada por este tipo de criminalidad, pero es importante reconocer que la responsabilidad principal recae en la federación, que cuenta con las instituciones y recursos necesarios para abordar estos desafíos. La Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la Nación deberían de ser los actores clave para enfrentar la criminalidad, mientras que el municipio y el estado serían complementarias.

Recomendación estratégica

Es incorrecto responsabilizar a los gobiernos municipales y estatales de la lucha contra la violencia y los negocios relacionados con esta criminalidad. Las limitantes que enfrentan les impiden asumir, a pesar de su importante labor de colaboración y de facilitación de las instancias de seguridad nacional y pública, la responsabilidad que corresponde a la federación. Ante ello, una adecuada asignación de responsabilidades implicaría dejar a la federación las consecuencias de los negocios de esta criminalidad organizada y a los estados y municipios las de la criminalidad común. O dotar de todas las capacidades legales, de coordinación y de fuerza las autoridades locales para que se hagan cargo y por lo tanto se responsabilicen de esta criminalidad que a la fecha les supera con creces.

Actualmente por el proceso electoral, tres estados se encuentran bajo escrutinio político: Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Los tres enfrentan serios desafíos de seguridad y violencia, dependiendo en gran medida, de la federación para controlar la violencia en sus territorios. La Ciudad de México, con su amplio contingente policial, 90 mil policías, y su papel como sede de importantes dependencias de seguridad, estaría en la mejor posición para dar seguridad. Mientras que Nuevo León, con sus 7 mil o Jalisco, con sus 6 mil policías, difícilmente pueden hacer frente a las organizaciones criminales de carácter nacional, transnacional o internacional, como el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Último momento

La movilización internacional de estudiantes en solidaridad con la causa palestina ha comenzado a recibir apoyo en México. Un campamento en la UNAM, hasta ahora pequeño, demanda el cese del genocidio imperialista en Gaza y el fin de la ocupación sionista; la ruptura de relaciones diplomáticas entre México e Israel, así como entre la UNAM y las instituciones israelíes; y detener la represión internacional y la liberación de los presos encarcelados por las protestas. La desmesurada y brutal respuesta del gobierno de Netanyahu a los ataques terroristas del pasado 7 de octubre por parte de Hamas contra la población civil de Israel está comenzando a tener consecuencias en el país, por lo que las autoridades deben estar pendientes para evitar que la situación escale y propicie ataques violentos de odio contra la comunidad israelí.

Agradezco los valiosos comentarios de **Misael Barrera Suárez** colaborador de CIS-Pensamiento Estratégico, especialista en seguridad e inteligencia y Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM.

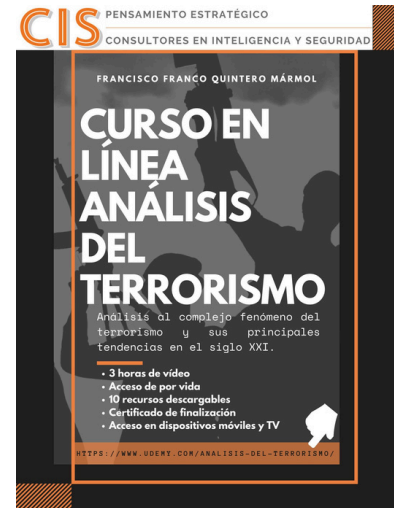
Síguelo en [@MisaelBarreraS](#)

Fernando Jiménez Sánchez

Investigador CONAHCyT-El Colegio de Jalisco; colaborador del CIS Pensamiento Estratégico; miembro del SNII y del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador de Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana de El Colegio de Jalisco. Doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, Maestro por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la UNAM.

Síguelo en [@fjimsan](#)





CIS PENSAMIENTO ESTRATÉGICO AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN Y/O DIFUSIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO. AGRADECEMOS RESPETAR LOS CRÉDITOS A LA EMPRESA, LOS AUTORES Y COAUTORES